

Conflictividad laboral en la provincia de Mendoza-Argentina. Nuevas y viejas demandas de los trabajadores formalmente precarizado

Nombre: Patricia Alejandra Collado

Institución: CONICET-INCIHUSA, Argentina

Grado: Dra. En Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza - Argentina

A modo de Introducción

Los estudios del trabajo en Argentina se han desarrollado siguiendo el pulso de las manifestaciones de su propio objeto. Es así como en la década de los '90, bajo la implementación explícita del programa neoliberal en Argentina, la mayor parte de las investigaciones de este campo específico de estudios sociales dedicaron sus esfuerzos a desentrañar las características, conformación, evolución y comportamiento del 'mercado de trabajo'. En este sentido y aún cuando contamos con valiosos esfuerzos de investigadores abocados al tema (Bialacovsky y Herms: 1997; Battistini: 1998-2001; Rofman: 2000, entre otros), el común denominador de este período ha sido la ausencia de miradas cautelosas y críticas acerca de la misma totalidad que se pretendía analizar: el mercado de trabajo. El método recurrente y muchas veces excluyente para efectuar tal acercamiento al tema fue el de la producción sincrónica y diacrónica de indicadores empíricos sobre el empleo.

Con el fin de la década y anticipando el nuevo siglo, las transformaciones estructurales (y, al mismo tiempo estructurantes) de una nueva 'cuestión laboral' dieron lugar a un corrimiento certero de tales intereses de estudio, ubicando entonces como centro de interés preferencial al trabajo más allá del empleo. Es decir, aquellas actividades que, apoyadas en la resolución de la subsistencia, se conformaban como periféricas al mercado laboral, caracterizadas por su precariedad, autogestionamiento o dependencia estatal (tal es el caso de los planes sociales y de microemprendimientos productivos), como así también constitutivas de nuevas formas de visibilización del conflicto social. De la mano de estos nuevos sectores y actividades emergentes post resquebrajamiento del tejido productivo nacional (Aspiazu y Nochteff: 1995), hacen su aparición, -como sujetos relevantes en la reflexión de los estudios del trabajo- nuevos actores y/o sujetos: desocupados, piqueteros, cartoneros, tomadores de fábricas y tierras, organizaciones comunitarias, comunidades originarias, etc.

Desde la perspectiva del 'trabajo' vinculado al empleo, los esfuerzos investigativos se concentran, en este nuevo momento, en las formas de organización flexible, los modos en que ésta se concreta en la periferia del capitalismo y, de acuerdo a las mismas, cómo se gestiona y utilizan las capacidades de la fuerza de trabajo.

El año 2001 (punto de inflexión en la crisis social, político-institucional y económica de nuestro país) traerá una apertura hacia otras temáticas, nuevamente contextualizadas y acechadas por el pulso de la cuestión social (Almeyra: 2004, Giarraca: 2001, Svampa: 2002, Zibecchi: 2003). Así, aparecen temas que -podríamos arriesgar- se unifican en torno a la reconstitución del tejido social y de las solidaridades perdidas. Se imponen, entonces, estudios, análisis e investigaciones sobre el 'sujeto' (social, laboral, ciudadano) o la 'política' –en referencia a una comunidad de intereses-, que se expresa y visibiliza como demanda y reclamo en el espacio público. Adquieren mayor énfasis las preocupaciones en torno a identidad, los sujetos y subjetividad, la representación (en sus formas tradicionales y novedosas), las problemáticas en torno a la acción colectiva y los 'nuevos' movimientos sociales (Svampa y Pereyra: 2003).

En el actual contexto que marca la culminación del primer quinquenio del siglo XXI, llama la atención un ambiente social enrarecido por su 'tensa calma'. Acostumbrados a presenciar crisis álgidas, manifiestas en grandes convulsiones sociales (como los derrumbes y cambios presidenciales, la hiper-desocupación vuelta fenómeno crónico, protestas y movilizaciones masivas, piquetes, escraches etc), se renueva la problemática latente de una vieja demanda, protagonizada por un más que 'anciano' sujeto: la cuestión de la conflictividad laboral y de sus protagonistas: los y las trabajadores/as.

Bajo las nuevas determinaciones estructurales del trabajo -producto de la transformación del capital a escala global y sus repercusiones al interior de la formación social argentina-, y de otras, impuestas por la coyuntura presente en nuestra economía y sociedad (incremento paulatino y sostenido de la inflación, depresión constante de los salarios, mantenimiento de altos niveles de desocupación y pobreza), se constata la renovada presencia del trabajo y los trabajadores como eje del 'conflicto'. Esta tendencia se vislumbra como apertura de un nuevo 'momento' en que el colectivo laboral toma un renovado impulso como protagonista de un diferente ciclo de protestas.

En este campo de interés se ubica el presente estudio. Su objeto es desentrañar cuál es la situación potencial de conflictividad laboral, cuál el nivel de disciplinamiento/ indisciplinamiento de la fuerza de trabajo y cómo se expresan y manifiestan las formas de resistencia y los conflictos contemporáneos en y desde el trabajo, en la provincia de Mendoza-Argentina, bajo la emergente revitalización del movimiento de trabajadores y sus organizaciones como sujetos de acción colectiva y política.

El escenario anterior a la estabilización de la crisis

El año 2001 representa para la Argentina un momento culminante y, a la vez, visagra entre la situación que generó el neoliberalismo económico y las formas de resolución que se implementaron para estabilizar dicha crisis. Este proceso que culminó con la caída del presidente De la Rúa (1999-2001) y que produjo una severa crisis institucional, constituyó la última fase de un progresivo deterioro social y

económico a consecuencia de las grandes transformaciones operadas en la economía del país y de las trazas impuestas a la estructura social en general y del empleo en particular. De tal modo se puede sintetizar este momento: “Cuando comenzó a resquebrajarse la hegemonía articulada alrededor del modelo neoliberal, la lucha comenzó en las rutas nacionales del país. Allí se expresaron los gritos indignados de la población castigada por el desempleo y la pobreza (...) Mientras esto ocurría, la mayor parte de nuestra dirigencia juraba lealtad eterna a la ficción de la paridad cambiaria, la estabilidad económica y la promesa de pertenecer al primer mundo, a fuerza de excluir a sectores cada vez más grandes de la población” (Battistini; 2002:15).

El modelo neoliberal había cambiado la geografía económica del país, destruyendo los tejidos industriales y comerciales, favoreciendo a los grupos económicos locales más concentrados que, asociados con capitales extranjeros, fueron los más favorecidos por los procesos de privatización de las empresas públicas nacionales. La paridad con el dólar fijó el monto de la expropiación en términos del mercado mundial.

Los efectos indirectos de la acción directa de transformación del capital en la región, se evidenciaron en el desbarranque de la estructura social anclada en la inclusión en el empleo, y la movilidad social se volvió un movimiento cuesta abajo de las clases medias y pobres, que pasaron a conformar la ‘población excluida del empleo’ y, excluida, también de los márgenes mínimos de sobrevivencia, resistiendo en el ‘límite de lo aguantable’ (Hinkelammert; 2002).

En general, las políticas sociales y económicas implementadas para salir a la crisis, tenían como objeto paliar la situación de extrema vulnerabilidad de la población ‘excluida’ sectores que, durante toda la década de los ‘90, se conformaron como protagonistas de las movilizaciones masivas, recurriendo a nuevos y viejos repertorios de acción a fin de hacer visibles sus demandas. En este período que va desde finales de los noventa hasta diciembre de 2001, los/as trabajadores aún incluidos en el mercado de trabajo no conformaban un sujeto identificable como tal, en la algidez de las protestas. Si bien éstos participaban lo hacían fuera de sus colectivos de representación tradicionales y lejanos a la visibilización en el espacio público en tanto ‘trabajadores’: las organizaciones vecinales (cuyas denominaciones daban cuenta a la vez, de las formas de enfrentar la subsistencia y de rearmar solidaridades: desayunadores, huertas comunitarias, comedores, etc), movimientos barriales, procesos assembleísticos y de ahorristas contaban entre sus filas a sectores trabajadores que manifestaban pero, lo hacían en tanto ‘ciudadanos’. Por otra parte los grupos de trabajadores expulsados construían una identidad al calor de aquellos medios de subsistencia que les fueron arrebatados, su misma denominación da cuenta de las múltiples facetas en que se aglutinan los trabajadores expulsados ‘del

trabajo-empleo': piqueteros; tomadores de fábricas, recuperadores de empresas, ocupadores de tierras, entre otros¹.

Tal fue la presencia de estos nuevos colectivos sociales que, no pocos investigadores y científicos sociales se arriesgaron a predecir que 'lo social' se instalaba como nuevo espacio en la visibilidad y presentación de protestas mientras se ausentaba de dichas acciones colectivas el 'trabajador' a la manera del viejo movimiento obrero con su impronta tradicional y sus organismos de representación. Esta tesis, en el fondo y forma bien gorziana, predecía el final abrupto del *trabajador* como sujeto de acciones colectivas y, específicamente como sujeto político (Gorz, 1989).

Volviendo a nuestro derrotero cuyo horizonte se conforma en la historia reciente y se fija en los sectores más vulnerables de la sociedad, las políticas gubernamentales en su conjunto estuvieron dirigidas, no a cambiar el rumbo de la acumulación social dominante, sino a paliar con el excedente mínimo las esquilas de la descomposición social consecuencia de la misma, tendiendo a mejorar los niveles y márgenes de maniobras de la gobernabilidad del país más que a producir un cambio sustancial en aquellos productos sociales-estructurales engendrados por el neoliberalismo. Es así que en el primer quinquenio del siglo XXI, el lugar de redefinición de la cuestión social pasó por el diseño de políticas tendientes a paliar el hambre de los sectores excluidos y en esta intervención, dismantelar los colectivos de agregación que no fuesen dirigidos y organizados desde el Estado. Las políticas sociales tuvieron, en este aspecto, una intencionalidad claramente desmovilizadora y aplicaron, allí donde se proponían nuevas formas de solidaridad horizontales y autogestivas, una clara intervención estatal a fin de producir o reproducir nuevas y viejas formas de clientela política. En términos económicos, dichos planes llevaban una impronta especial: hacer responsables a las víctimas de su propio destino. Es así como inauguran formas de contraprestación para aquellos que acceden a un plan social por la vía del trabajo – empleo en sectores públicos o acceso a créditos sociales a través de lo que se denomina micro-emprendimientos-, que, nuevamente, derivan la solución sobre la subsistencia, a la gestión y recursos de los propios damnificados.

La 'pobreza' estructural lejos de desaparecer acalla su voz pública, institucionalizando sus organizaciones y/o involucrándose en la gestión social del Estado, como en el caso de la mayoría de las agrupaciones de piqueteros que, por membresía, dirimen a quiénes deben llegar y a quiénes no, las ayudas económicas y sociales. En este marco en que se estabiliza la algidez del ciclo de protesta social, comienzan a tomar relevancia las demandas públicas y privadas del sector de trabajadores

¹ Para nosotros (coincidiendo con otros autores que reflexiona sobre la misma temática) el mundo del trabajo abarca dos esferas, necesariamente integradas: el mundo del trabajo con empleo y del trabajo sin empleo. Para acceder a una reflexión más detallada sobre este tema, que se desprende de la misma concepción ampliada de trabajo ver Collado, P (2006).

vinculados al empleo, postergados hasta ese momento, de las estrategias de intervención estatales cuyo objeto fundante fue cerrar el proceso abierto por la gran crisis social.

Breve panorama provincial²

La provincia de Mendoza se desarrolló a lo largo de su periplo histórico moderno sobre la base de un eje central constituido por el sector agroindustrial vitivinícola. Desde la consolidación del modelo agroindustrial (1880-1910), se evidencia en el espacio local un importante sector de propietarios rurales (grandes, medianos, pequeños) cuyo desarrollo se muestra articulado a la vitalidad con que se desenvuelven las actividades urbanas. Así Mendoza se constituirá en el centro regional del oeste Argentino. El acceso a la tierra de pequeños y medianos productores de origen europeo y su importante movilidad social ascendente conformó tempranamente un escenario social con un amplio estrato medio, tanto urbano como rural (Collado, 2003).

Durante el período que va desde 1940-60, se produce en la provincia de Mendoza un proceso importante de sustitución de importaciones, que favorecen el desarrollo de nuevas actividades tales como la petrolera, siderúrgica, metalmecánica y la producción energética local (Represas hidroeléctricas Los Nihuales), que posibilitan un crecimiento geométrico del mercado de trabajo asentado en la industria y el fortalecimiento de actividades dependientes de la esfera estatal (salud, educación, vivienda y obras públicas). Este crecimiento, de conjunto, aventaja los índices registrados para el país, para el mismo período histórico³ (Collado: 2005).

Con el cambio de patrón de acumulación hacia la valorización financiera (post '76, proceso dictatorial en el país) se iniciará un sostenido fenómeno de caída de los estratos medios, no sólo de los asalariados sino también de pequeños y medianos propietarios rurales. El endeudamiento, la escasa diversificación productiva, la brecha tecnológica y las crisis de sobreproducción, unidos a fenómenos exógenos como el cambio en los patrones de consumo de la población (la sustitución del vino por consumo de aguas gaseosas y cerveza)⁴, llevarán a la crisis a un conjunto importante de actores

² Mendoza ocupa un lugar periférico con respecto a su peso relativo en el PB Nacional. En el año 2005 contribuyó en un 3,76% al PBI nacional; mientras que en 2006 Mendoza representó el 3,81% de la economía nacional, medida en valores constantes de 1993. Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Mendoza.

³Según el informe presentado por el Centro de Empresarios Mendocinos CEM, en los '60 el PBG mendocino creció cerca del 53% y en la década de los '70 lo hizo el 33.5% frente al 42.4% y al 27.7% de crecimiento del PBI nacional. Por el contrario en los años '80 cayó un -16.7% (frente a la caída del PBI nacional del 9.6%) y en los '90 aumentó un 36.4, por debajo del 49% del PBI Nacional.

⁴ Los siguientes datos avalan nuestra afirmación: "Aun cuando la contracción del consumo de vinos constituye una tendencia generalizada en el escenario internacional, el ejemplo argentino se destaca tanto por la intensidad que la misma asume (una caída del 50% en el consumo por habitante, al cabo de 19 años), como por su persistencia temporal. (...) en 1980, casi el 90% de los despachos de vinos al consumo estaba conformado por vinos de mesa, y apenas el 7% por vinos finos; en 1990, tales porcentajes habían pasado a ser de 81,3% y 11,6%, respectivamente. Es durante el decenio de los años noventa cuando tal proceso revela una particular intensidad (en correspondencia con la regresividad distributiva), a

tradicionales de la economía mendocina. Estos se verán inermes frente a la concentración, centralización y trasnacionalización de la economía provincial. El escenario de reconfiguración de la economía rural será, en el espacio regional, la contracara necesaria de los ajustes percibidos y realizados en la economía urbana, entre los cuales el despoblamiento de las áreas productivas y el ensanchamiento de los asentamientos pobres urbanos se constituirán en un indicador de dichas trayectorias sociales, paralelas y conjuntas.

El perfil vitivinícola y el desarrollo de las explotaciones extractivas (fundamentalmente petroleras) harán que la provincia se diferencie de la nación en el momento del Ajuste Estructural (década de los '90); mientras que en el ámbito de la nación se pone en marcha un proceso sostenido de desmantelamiento industrial, la provincia centrará las reformas en la *reconversión* de sus grandes industrias (petróleo y vino).

Las políticas de apertura de mercado y su secuencia privatizadora se harán sentir a partir de los impactos locales de la privatización de las empresas nacionales (o su venta bajo el nuevo espíritu de época: aeronavegación, telecomunicaciones, correos, petróleo etc.) y de las grandes empresas locales (energía, gas, agua, bancos provinciales), el recorte de las plantas de personal llevarán a que en el transcurso de una década (1991-2001) se triplique la tasa de desocupación de la provincia, pasando del 4% al 13.6% respectivamente (DEIE, 2001)

La Reforma del Estado provincial estuvo orientada hacia la reestructuración productiva del circuito agroindustrial vitivinícola y no a su desmantelamiento, produciendo re-regulaciones en el mercado del vino que favorecieron las inversiones extranjeras asociadas a capitales locales, los que en gran medida, perdieron su lugar central en la economía regional (Azpiazu y Basualdo, 2000). La concentración y centralización de capital en el sector, la implementación de tecnología y la desaparición de una amplia gama de medianos y pequeños propietarios rurales, modificaron la estructura social rural de la provincia. Por lo tanto, el mercado de trabajo rural comienza a desplazar población al centro urbano de mayor envergadura (Gran Mendoza) verificándose un engrosamiento de las poblaciones pauperizadas en los "márgenes" del conurbano.

El proceso nacional y sus consecuencias en el espacio regional, tuvieron efectos que cuajaron en el deterioro del mercado laboral hacia fines de la década de los '90. Las políticas implementadas desde el gobierno provincial inauguran la 'legalidad' de la precarización de los asalariados en relación de dependencia, ya que será el mismo Estado Provincial quien establecerá el congelamiento de los puestos de trabajo de la Administración Pública; la disminución de la carga horaria del personal

punto tal que en 1999, los vinos de mesa comunes explican las dos terceras partes del total de los despachos (67,1%), y los finos ya pasaron a representar más de la cuarta parte del total (26,4%)". (Azpiazu y Basualdo; 2000; 58).

(pasando de 35 a 25 horas semanales), el congelamiento salarial (que perduró hasta inicio del 2000) y la puesta en práctica de las nuevas modalidades contractuales bajo el signo flexible⁵.

Los y las trabajadores sujetos del conflicto

A partir del año 2005 se hacen visibles en la provincia un conjunto importante de protestas protagonizadas por amplios sectores de trabajadores. El fenómeno masivo y generalizado hizo presente a la opinión pública y al gobierno provincial, la postergación de la discusión sobre las condiciones y relaciones de trabajo. La manifestación pública del conflicto remite a la estabilización del período de crisis y al alejamiento del fantasma del desempleo como forma social de disciplinamiento de los y las trabajadores⁶.

Es importante aclarar al lector que el presente escrito es una síntesis de un proyecto de investigación mayor actualmente en curso, aquí exponemos algunos aspectos especialmente relevantes del mismo⁷. Nuestra metodología general de trabajo se desarrolló siguiendo una estrategia cualitativa y cuantitativa de investigación, centrada en la realización de entrevistas en profundidad a informantes calificados, observación en piquetes, marchas y asambleas, como también análisis de documentación producida por los sindicatos, así como de estadísticas sobre conflictividad laboral elaboradas por entes gubernamentales. El seguimiento de los ciclos de protesta se realizó fundamentalmente a partir del análisis de información periodística de los dos diarios locales de mayor tiraje en la provincia⁸. Nuestro recorte temporal abarcó los años 2005-2007.

En términos generales podemos decir que la conflictividad social en la provincia de Mendoza, en el contexto post crisis del 2001, muestra en su centro a dos viejos protagonistas del escenario laboral mendocino: los trabajadores vitivinícolas y los empleados del Estado Provincial. Si bien en la consideración del tipo de trabajo y las condiciones en que el mismo se realiza, ambos sectores evidencian una disparidad considerable, son éstos grupos los que, cerrada la crisis social, demostrarán mayor vitalidad en la visibilización de sus demandas, centrados en la disputa por el salario y las postergadas mejoras en las condiciones y relaciones laborales. Por razones de espacio y de su centralidad a la hora de considerar nuestro tema de estudio, expondremos en este trabajo

⁵ El Estado Provincial inaugura la precariedad del empleo (1989) por medio de contratos de locación de obra, locación de servicios y pasantías estudiantiles no rentadas aún antes que la Nación legitimara los mismos con la Ley 24013 de 1991 (la que establece modalidades nuevas de despido, la figura de empresas de servicio eventual y contratos a tiempo parcial) Esta ley reforma la N° 20744 vigente desde la dictadura militar (1976). Actualmente rige la Ley 25013.

⁶ La tasa de desocupación abierta de la provincia de Mendoza disminuye de un 16.9% en el primer trimestre de 2003, al 4.2% en el primer trimestre de 2007. Esto manifiesta dos fenómenos concurrentes: la estabilización y extensión de la precariedad del empleo y la incidencia que, en el mercado de trabajo, tienen los planes sociales cuya contraprestación se hace efectiva a través del empleo público.

⁷ Proyecto de investigación presentado y aprobado por CONICET-Argentina (2007-2009): "Formas actuales de confrontar el disciplinamiento laboral: visibilización pública y privada del conflicto capital / trabajo en la provincia de Mendoza- Argentina".

⁸ Periódicos de circulación provincial: Los Andes y Diario UNO.

exclusivamente la deriva seguida por los trabajadores del Estado, con singular énfasis en el sector de la salud.

El sector estatal

El sector de los asalariados del Estado es uno de los más diversos en su composición; se incluyen en el mismo las áreas de educación, salud, administración (central provincial y municipal) como así también el transporte público de pasajeros. Los empleados públicos de la provincia suman un plantel de 85000 personas en la actualidad⁹.

Dentro de este diverso conjunto, son los trabajadores de la educación y la salud los que han protagonizado en mayor medida las acciones de protesta que colmaron la escena pública del período considerado. Si bien esto demuestra que el conflicto llegó a un momento de efervescencia visible, se considera a su visibilidad como eslabón último de una confrontación cuyos períodos de latencia se desarrollaron al interior de los ámbitos de trabajo. De tal forma: "Las acciones colectivas expresan conflictos diversos que involucran momentos de latencia y manifestación, asumiendo un carácter precario, por lo que es posible 'periodizar' su aparición y disolución" (Scribano; 2001).

En el caso de los trabajadores públicos, éstos se constituyen como sujetos que disputan el sentido de la crisis del Estado provincial e impugnan los sucesivos recortes presupuestarios a las áreas vitales del mismo (salud, educación y administración). La implicancia más sentida de esta situación para los trabajadores del sector, ha sido la sobrecarga de esfuerzo (físico, mental, psíquico) por aumento en la cantidad de tareas que deben desempeñar por puesto de trabajo y con ello (debido a la disminución paralela de recursos e infraestructura y los sucesivos achicamientos en el gasto público), la mayor demanda que se impone a los efectores públicos como corolario de la pauperización social.

En el plantel del personal del Estado y como consecuencia de la reestructuración del mismo a principios de la década de los '90, predominan los trabajadores 'formalmente precarizados' frente a los trabajadores de planta amparados por el Estatuto del Empleado Público, que entre sus aspectos fundamentales, asegura la estabilidad del empleo. El ingreso de nuevos trabajadores al sector, a partir de ese período, se da por la vía de los contratos a tiempo determinado o por locación de servicios, las pasantías educativas y la tercerización de servicios (que enmascaran el vínculo real del trabajador en relación de dependencia) entre los modos más comunes de vulnerabilidad del empleo¹⁰.

⁹ La EPH calcula en un 25% el total de empleados públicos, contemplando en ese porcentual el personal empleado en educación, servicios sociales y de salud, administración pública, defensa y seguridad social. Según los datos disponibles actualizados a diciembre de 2003, tomados para el Gran Mendoza.

¹⁰ Es importante destacar que existen diversas formas de vulnerar aún más el empleo público. En la planta de las administraciones municipales se contrata a personal que no figura en ningún registro y cuyo salario aparece como gastos corrientes (de limpieza, mantenimiento y materiales).

Es así que, ante innumerables modalidades de contrataciones se registran dos consecuencias para la planta de trabajadores en su conjunto: por una parte el envejecimiento paulatino y disminución del personal estable y con mayor cobertura de derechos, amparados por el Estatuto del Empleado Público y, por otra parte, la disminución en el personal agremiado o sindicalizado.

Los contratos, más allá de lo que la ley indica, se renuevan periódicamente con la promesa de hacerse efectivos si se mantiene la productividad. Grupos considerables de trabajadores 'formalmente precarizados', se consolidan como rehenes de las jefaturas políticas del partido gobernante de turno, cuyo horizonte y futuro laboral queda atado a los cambios periódicos (alternancia) de los mismos. Su escasa participación a la hora de efectuar reclamos los segrega de los trabajadores efectivos, que ven en ellos una competencia laboral en términos de carrera, un mejor posicionamiento por productividad y por otra parte, un grado importante de desafección con respecto a los reclamos realizados por medio de las representaciones sindicales¹¹.

A partir del año 2005, las protestas de los trabajadores estatales están marcadas por las discusiones presupuestarias que, al comenzar cada año legislativo, recrudecen en el escenario público. Es en el mes de marzo cuando se registran la mayor cantidad de repertorios de acción asociados a sus demandas e involucran a una amplia gama de trabajadores dependientes del ámbito estatal.

La causa principal que esgrime el sector como eje del conflicto, está puesta en los retrasos salariales y su nivel que, en promedio, no sobrepasa la canasta básica de alimentos para una familia pobre¹². Sin embargo las disputas entre los estatales y el gobierno van más allá del retraso salarial cuya centralidad es innegable, asociándose al deterioro progresivo de las condiciones de trabajo. Aún así, hasta comienzos del año 2005 las protestas no fueron canalizadas por la vía de manifestaciones públicas, sino que se centraron en las discusiones paritarias en el marco de negociación periódica sectorial, las que sin embargo nunca finalizaron con arreglos que el sindicato considerara aceptables¹³. El viraje de actitud frente a la negociación, llevó a la apertura del ciclo de protestas considerado y respondió a un cambio en el marco de oportunidades para expresar y visibilizar públicamente el conflicto. Así, para evaluar este tipo de acciones colectivas es necesario comprenderlas como "el resultado de intensiones,

¹¹ Esta información se basa en las entrevistas realizadas a los empleados públicos que participaron en el ciclo de protestas de marzo a abril de 2007. La competencia entre trabajadores estables e inestables o con contratos a término, se da fundamentalmente por diferenciación salarial. Los contratados, en general, cobran salarios mayores que los empleados por tiempo indeterminado, ya que en general y según el tipo de contrato, no se les realizan los descuentos por cargas sociales y previsionales.

¹² Según la DEIE, en promedio la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro miembros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31 años, un hijo de 5 y una hija de 8 años fue en promedio de pesos argentinos \$388 (US\$ 123) en 2007 y de pesos argentinos \$352 (US\$ 111) en 2006.

¹³ Se denomina 'paritarias' a las comisiones especiales, integradas en números iguales por representantes de trabajadores y de empresarios, que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales (salarios, condiciones de trabajo, horarios, etcétera), intervenir en conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo.

recursos y límites, una orientación intencional construida mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones” (Melucci, 1994: 157).

En este marco, la estructura de oportunidades para el planteo de demandas del sector se abre sostenida por dos circunstancias específicas:

1. El recambio generacional y la redefinición política de la dirección sindical de los empleados públicos.
2. El cuestionamiento generalizado al gobierno provincial por su inacción frente a los grandes problemas que se plantean en la agenda social.

Con respecto al primer punto señalado, es importante destacar que el sindicato de los estatales constituyó siempre una variante crítica al sindicalismo corporativo de cuño peronista, fundamentalmente durante los gobiernos del Dr. Carlos Saúl Menen (dos períodos presidenciales: 1989- 1995; 1995-1999). Durante esa etapa, se torna uno de los más gremios que más confronta los planes de ajuste neoliberales, participando en 1992 de la creación de la nueva central de trabajadores a nivel nacional (CTA-Central de Trabajadores Argentinos)¹⁴. Sin embargo debido a la aplicación de los ajustes estructurales propugnados por dicho gobierno (denominados Reforma I y II del Estado) y ante los escasos resultados obtenidos por el sindicato para contrarrestar sus consecuencias (en la provincia), se verificó un proceso de desafiliación masiva (sólo entre los años 1990 a 1996 se desvincularon del mismo unos 3.300 trabajadores) que menguó las capacidades de disputa del gremio. A principios de la década de los noventa y asimilando la derrota de un ciclo de protestas que paralizaron la administración central entre los meses de marzo a abril de 1992, el gobierno provincial impuso las más severas medidas contra los trabajadores públicos: congelamiento de salarios; recorte de la jornada de trabajo; privatización de la caja previsional del sector; cierre de ingresos a la planta estable de personal, entre las más importantes. Como consecuencia de esta derrota, el personal de la administración central no volvió a participar de protestas y manifestaciones convocadas por el sindicato, hasta el año 2005.

¹⁴ El programa fundacional de la CTA-Nacional proclama: “La CTA es una nueva central de trabajadores, ocupados y desocupados, fundada sobre tres conceptos esenciales: la afiliación directa, una democracia plena y la autonomía política. El 14 de noviembre de 1992, frente a la entrega y la traición del sindicalismo empresario argentino, los integrantes de diversos sindicatos y nuevas organizaciones territoriales y gremiales formaron esta central con la idea de instrumentar un nuevo modelo sindical basado en éstos tres preceptos, fundamentales para la construcción cotidiana de la fuerza de los trabajadores. Desde hace una década la CTA trabaja para cambiar la sociedad y hacer realidad esa Argentina con trabajo, salud, educación y justicia para todos. afiliación directa: por primera vez en nuestro país, la afiliación de cada trabajador es directa. Todos los trabajadores, ocupados o no, pueden afiliarse a la Central. elecciones directas: cada afiliado tiene voz y elige en forma directa a su conducción en los diferentes niveles (local, provincial y nacional). Se legitima la representatividad, se fortalece la democracia y se reivindica al trabajador en la nueva fábrica que es el barrio. Autonomía: el único interés al que obedece la CTA es al de la clase trabajadora. La central es autónoma de los grupos económicos, los Gobiernos y los partidos políticos. Proclama fundacional CTA-Noviembre de 1992.

A partir de este punto de inflexión, la mayor parte del cuerpo de delegados de la administración central y descentralizada sufrirá un paulatino recambio generacional, hasta llegar a suplir la casi totalidad de los delegados, hacia fines de la década de los '90. Sustentado en dicha transformación profundizará y liderará, en sus discursos y propuestas, los reclamos anti-neoliberales, lo que les permitirá reclutar al activismo sindical más dinámico y crítico, rearmando fuerzas a partir de campañas de afiliación, canalizando el descontento por el desmejoramiento de las condiciones de trabajo y en general por las consecuencias de la pauperización social masiva que había llegado a fines de los años '90 a un grado extremo¹⁵.

Es debido a esta nueva impronta política que asume el sindicato que, a partir del año 1997, comienza paulatinamente a recuperar su incidencia en la masa de trabajadores públicos, verificándose una tasa media de afiliación de 200 empleados por mes. En la actualidad, el total de afiliados suma 5.500 trabajadores públicos¹⁶.

A comienzos del nuevo siglo el sindicato se encontrará mejor cimentado en términos de afiliación, con una política clara de expansión hacia nuevos sectores de trabajadores públicos cuyos representantes tradicionales 'gozan' de gran desprestigio a causa de su vinculación con las políticas neoliberales. Comenzó entonces un paulatino traspaso de los afiliados del sindicato de la salud (ATSA- Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) al de empleados públicos (ATE-Asociación de Trabajadores del Estado).

El segundo aspecto importante que favorece la movilización del sector, estuvo dado por el fin del impasse de 'paz social' que obtuvo el gobierno provincial tras finalizar la crisis del 2001. Estabilizadas las consecuencias sociales más graves a partir de la implementación masiva de políticas para sostener la pobreza estructural en todo el ámbito nacional (Plan Jefes y Jefas de Hogar y posteriormente, Plan Familias) y garantizar la gobernabilidad, comienzan a recrudecer y a visibilizarse en el escenario social, las deudas 'internas' pendientes¹⁷.

¹⁵ De un 32.2% de población pobre a comienzos de la década de los '90 la pobreza llegó a un 37.7% en Mayo del 2000, habiendo pasado por importantes picos de recrudecimiento en la serie histórica, siendo los años 1997 y 1998 los de mayor aumento de la misma. Podemos decir que en términos generales y acompañando el deterioro de los indicadores económicos de la región, la pobreza en Mendoza tuvo una tendencia decreciente hasta el año '94 en que comienza una escalada de crecimiento sostenido. Más abruptos son en comparación, los decrecimientos y aumentos de la población indigente, evidenciando un umbral mínimo entre octubre del '93 y mayo del '94, con un porcentual de 2.7%, que registra igualmente un aumento sostenido hasta mayo del 2001 en que llega al 18%. En sólo un año el porcentaje de la población indigente se duplicó. Para la población pobre, el deterioro mayor se evidencia en los últimos cuatro años de la década, con un pico en el 2001, llegando a afectar al 45.2% de la población. Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la Provincia de Mendoza – Argentina.

¹⁶ Datos proporcionados por miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Mendoza, Marzo de 2008.

¹⁷ El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados fue creado a comienzos del año 2002, en el marco de la emergencia económica, alimentaria y sanitaria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. A través de su implementación, el Gobierno encabezado por el Dr. Eduardo Duhalde, pretendió hacer efectivo el derecho familiar de inclusión social, en cumplimiento del mandato del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional que establece el rango constitucional de los tratados y pactos

De modo tal, el gobierno comienza a ser cuestionado por la irresolución de una cantidad importante de reclamos sociales, cuyo eje se sustancia centralmente en la demanda de mayor seguridad (frente al incremento inédito de violencia y crecimiento de la delincuencia en la provincia, post proceso de desbarranque de la estructura social) y, el deterioro masivo de los servicios públicos, entre los que se ven más afectados la salud y la educación.

Por tanto, los reclamos de los empleados públicos amplifican su recepción positiva hacia el conjunto social al conformar una demanda sentida y generalizada de la población, lo cual solidifica sus acciones en el espacio público, logra la extensión de redes de solidaridad frente a sus reclamos y obtiene apoyos de distintas organizaciones de la sociedad civil.

Participación y marcos de acción colectiva

Tomando las experiencias de las organizaciones sociales que surgieron como respuesta a la crisis del país, los trabajadores del Estado emulan las formas de democráticas y de participación asamblearia para dirimir las pautas y repertorios de acción a fin de hacer visibles sus reclamos. Frente a los formatos sindicales de tipo tradicional de organización vertical (vinculados generalmente al partido peronista), ATE se dispone horizontalmente siguiendo una organización por ámbitos de trabajo y canalizando la efervescencia de sus afiliados a partir de nuevas prácticas: todas las medidas de fuerza se toman de conjunto y por mandato expreso de cada sector interviniente, en asambleas masivas en las que cada trabajador expresa su posición a mano alzada y sin límite de tiempo. Las asambleas en el lugar de trabajo garantizan la presencia de una importante cantidad de trabajadores en la toma de decisiones y, por otra parte, son ellas mismas tomadas como 'medida de fuerza' pues, en el momento en que se realizan se produce 'de hecho' un corte de servicios del personal que sólo garantiza guardias mínimas.

Tal como sucede con los movimientos sociales las formas de demandas que sostiene el ciclo de protestas de los estatales se realizan en un marco de referencia construido a partir de tres tareas: creación de marcos de diagnóstico, pronóstico y motivación.

Los marcos de diagnóstico "identifican algunos acontecimientos o situaciones como problemáticas y necesitadas de cambio, y por eso señalan a ciertos agentes sociales como responsables (...) el marco de pronóstico establece un plan para corregir esa situación problemática especificando, para ello, qué debería hacerse (...) y los marcos de motivación implican un proceso de construcción social y el

internacionales, y expresamente en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El número de beneficiarios del programa alcanzó a 1.987.875 personas. Cada uno de ellos percibe una suma de \$ 150, y a cambio de ello debe participar en actividades de capacitación, comunitarias o productivas. Cfr. PAUTASSI, Laura; ROSSI, Julieta; CAMPOS, Luis (2003).

reconocimiento de motivos e identidades compartidas, a su vez sirven de impulso para la acción colectiva" (Hunt et al, 1993:228-229).

El diagnóstico compartido por los activistas sindicales se dirige a establecer la responsabilidad directa del gobierno y sus planes de ajuste sobre la situación general imperante en la provincia, gobiernos que desde los años '90 han regulado la situación económica a favor del mercado y en detrimento de los trabajadores. En breve, el Estado es el responsable de los 'males' del mismo Estado. En palabras de uno de los delegados sindicales: "(...) durante muchos años el Estado no fue nada...no sirvió para nada y todos querían achicarlo (...) nosotros defendimos nuestra fuente de trabajo pero lo que más defendimos fue al Estado mismo"¹⁸.

Si bien esta alusión refiere a una caracterización general del escenario social imperante, también remarca específicamente, la responsabilidad de los diferentes gobiernos (desde los años '90) sobre la situación de deterioro de las condiciones de trabajo del sector, enfatizando las representaciones sociales 'negativas' acerca del perfil del empleado del público: "para todo el mundo los estatales somos parásitos, no trabajamos, hasta que se siente con el paro que sí (...) esto fue peor cuando entraron los de los planes, todos se fueron contra los estatales, para todos somos clientela del gobierno"¹⁹.

Frente a esta caracterización, las protestas de los estatales implican dos ejes centrales, por una parte la revalorización de las tareas del empleado público, las que cobran importancia cuando éstas no se realizan (es decir que la población toma conciencia de la relevancia de los trabajadores cuando los mismos realizan un paro); por otra parte, establecen una clara diferenciación entre los 'trabajos por planes sociales' y el 'empleo público', distinción a la que atribuyen las connotaciones de trabajo no digno- trabajo digno, respectivamente.

Así, cuestionan el uso por parte del Estado de las contraprestaciones laborales realizadas a través de los planes sociales por las siguientes razones²⁰: a) desvalorizan el trabajo del empleado público, cuyo salario básico se pone en el límite impuesto por el plan social y tomado a éste como su base; 2) imponen una representación social sobre el 'trabajador público' como cliente político del gobierno de turno o su consecuencia visible: la 'dependencia' hacia el gobierno que los mismos generan; 3)

¹⁸ Entrevista N°6, realizada delegado de ATE, sector áreas descentralizadas Mendoza en diciembre de 2007.

¹⁹ Entrevista N°2 realizada delegado Administración Central de ATE Mendoza en diciembre de 2007.

²⁰ La caracterización surge de la veintena de entrevistas en profundidad realizadas a los empleados públicos de las administraciones central y municipal, realizadas entre los meses de marzo a septiembre de 2007. Es importante remarcar que dichas contraprestaciones se dan fundamentalmente en el ámbito municipal y sus funciones son: mantenimiento, limpieza pública y servicios de maestranza en general, ubicándose en los peldaños más bajos de la carrera del empleado público.

segregan a los trabajadores del estado, diferenciando salarios y condiciones de trabajo en idénticos puestos de trabajo y/o en la realización de las mismas tareas o funciones²¹.

El pronóstico que realizan los estatales se resuelve en un plan concordante con el fortalecimiento del Estado frente al mercado, es decir que promueven el fortalecimiento del Estado en base a un 'proyecto nacional' que resguarde los recursos del país y que por otra parte salde las deudas internas sociales antes que las 'externas'. La mayor parte de los delegados estatales esgrimen un proyecto de nación que fundamentalmente se define por lo que no debe ser, es decir no debe ser el proyecto del neoliberalismo, no debe favorecer a los grupos económicos concentrados, no debe permitir la concentración de capitales, ni aumentar las desigualdades sociales.

Sin embargo dicho pronóstico general cuenta con una perspectiva de coyuntura, que a la vez conforma la propuesta que esgrimen los estatales, a la manera de un 'plan de contingencia', con el objeto de lograr el aumento presupuestario necesario para dar cabida a un aumento salarial del sector y a la vez para demostrar a quiénes sirven las políticas del Estado provincial. Así lo expresa un miembro de la comisión directiva de ATE-Mendoza:

"Sí, hay una propuesta para mejorar los salarios y llevarlos a todos por encima de la canasta básica. Se centra en la eliminación de la tasa cero, por la cual las principales empresas mendocinas, de una infinidad de ramas del sector primario, no pagan impuestos al Fisco. Esta ley se aplicó en el período Menemista para paliar los diferimientos fiscales de las provincias vecinas. Se suponía que era momentánea, hoy se la considera algo así como un derecho adquirido del empresariado mendocino. Son aproximadamente 6000 empresas, aunque los datos oficiales no han sido mostrados en su totalidad (...) El presupuesto provincial 2008 es de casi 6.000.000 de pesos; lo que se calcula que se recaudaría con la eliminación de la tasa cero, es de aproximadamente 450.000.000 pesos. Saque sus conclusiones".

²¹ Esta visión coincide con el estudio realizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina), según el cual el Plan Jefes y Jefas de Hogar es considerado como una transferencia de ingresos y no un derecho de inclusión social (previsto en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC). El derecho a un nivel de vida adecuado está garantizado de la siguiente forma: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia) debido a: a) no posee un alcance universal sino que está dirigido a una población objetivo definida (desocupados con menores a cargo, inscriptos con anterioridad al 17 de mayo de 2002, y mayores de 70 años que residen en una determinada región del país por tanto no se reconoce la igualdad ante la ley ya que no es otorgado a todos aquellos que se encuentran en la misma situación; b) el monto asignado no es suficiente para cubrir las necesidades básicas alimentarias de una familia (no realiza distinción según la cantidad de integrantes del hogar por lo que la incidencia del programa es menor en hogares numerosos); c) es transitorio (finaliza conjuntamente con la emergencia laboral que actualmente está declarada hasta el 31 de diciembre de 2003). Un derecho cuyo ejercicio es sometido a plazo -y en este caso, a un plazo por demás exiguo- es alterado en su sustancia;); d) no está prevista la posibilidad de recurrir administrativa ni judicialmente en caso de rechazo de la inscripción del plan; e) carecen de mecanismos transparentes de asignación y fiscalización, y de producción de información para evaluación de resultados.

En este sentido el sindicato postula una forma de resolución de la crisis presupuestaria sobre la base de nivelar hacia arriba los salarios del sector “que se reviertan las formas de recaudar los impuestos, que cobren más al que más tiene, nosotros hemos hecho un estudio según el cual la provincia puede sanear sus ingresos y equilibrar su presupuesto cobrando a los grandes deudores del estado, persiguiendo a los evasores, que son las grandes empresas...sólo con esta medida se puede aumentar los salarios de los estatales”²².

La motivación que esgrimen los delegados sindicales de ATE, se funda en llenar el vacío de representación manifiesto en los años '90, resignificando el papel del sindicato como 'fiel a las bases y sus necesidades'. Para ello, unifican estrategias discursivas (centradas en la crítica al gobierno) con estrategias de forma (impulso de los procesos asamblearios). Se proponen así sustanciar una construcción identitaria bien específica, por diferenciación con el 'otro' más que por afirmación de los que 'se es'²³.

Tal como lo enuncia Alcira Argumedo, en el proceso de constitución de identidades se sintetizan y redefinen tanto las características personales y únicas de los individuos como los rasgos compartidos que singularizan y diferencian al grupo: valores, creencias, comportamientos, experiencias, memoria colectiva que se expresan en discursos, modos de percibir el mundo, conciencia del pasado histórico y proyección del futuro” (Argumedo; 2001).

Es decir que el sindicato de empleados públicos se construye como: 'no tradicional', 'no verticalista', 'autónomo' (de los partidos políticos), y 'respetuoso de las diferencias de perspectivas ideológicas', en lo que ellos llaman “proyecto popular”²⁴. La dirección misma del sindicato establece una clara diferenciación con las formas tradicionales de representación al ser dirigido actualmente por una mujer, quien encarna los valores de respecto a 'las diferencias'. Sobre este proyecto se asientan las actividades que desarrolla el sindicato fundamentalmente en cuanto a la formación y capacitación de los afiliados: “No se si nosotros sabemos que proyecto de sociedad alternativo proponer, pero sí sabemos lo que queremos (...) estamos realizando un programa de formación de los afiliados para discutirlo, para defender nuestros derechos como trabajadores, para fortalecer el sindicato”²⁵.

Las respuestas del Estado

²² Entrevista N°3 realizada delegado Administración Central de ATE Mendoza en diciembre de 2007.

²³ De modo tal que “la identidad colectiva surge, por un lado, como el resultado de la interacción y negociaciones ordenadas a partir de un conflicto (donde) se precisa del 'nosotros', se definen los opositores, así como también un grupo de actores que se mantienen neutrales y pueden ser potenciales aliados, definidos como audiencias. A estas posiciones se denomina 'campos de identidad'. Ver: (Hunt et al; 1993:221)

²⁴ Entrevista N°1 Realizada a la Secretaria General del Gremio de Empleados Públicos, Raquel Blas.

²⁵ Entrevista N° 3. Miembro del Cuerpo de delegados reparticiones descentralizadas, febrero de 2008.

Las acciones del gobierno provincial han estado atravesadas por el intento de desmontar todo reclamo de mejoras salariales, esgrimiendo como eje argumentativo la imposibilidad presupuestaria de atender las demandas realizadas por el sector. Reforzando esta línea de acción general, se pueden distinguir dos vías utilizadas con el objeto de desmontar las protestas de los empleados públicos: una dirigida a los trabajadores y sus representantes y la segunda, orientada hacia la opinión pública.

a) Dirigidas hacia trabajadores y sus representantes:

- Judicialización del conflicto: dichas acciones se sustancian fundamentalmente en el sector más dinámico del conflicto: los agentes de la salud. Con ellos se esgrime la figura y sanciones penales del 'abandono de persona' para intentar desmontar toda acción de protesta. El intento de judicializar el conflicto fue utilizado para obligar a este sector de trabajadores a acatar la conciliación obligatoria²⁶ del gobierno, reanudar las negociaciones paritarias y desmontar el proceso de asambleas permanentes realizadas por los trabajadores.

- Fragmentación de Intereses: El gobierno sostuvo negociaciones individuales con las distintas representaciones sindicales, de modo tal de quebrar la unidad que desde comienzo del ciclo de protestas, en el año 2005 se manifestaba ante cada reclamo que tomaba estado público.

Así, en el proceso de conciliación iniciado el 12 de mayo de 2006, ATSA (Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina), AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) y ATE rechazan por actas la propuesta del sector oficial. El mismo día en horas de la tarde, el acta es aceptada y firmada por ATSA y AMPROS.

Esto, desconcertó, decepcionó y desorientó a la base de trabajadores, cuya consecuencia fue un proceso nuevo de desafiliaciones masivas en AMPROS, (aproximadamente 700 profesionales de la salud se afilian a ATE).

Por este desacuerdo entre los sindicatos, ATE organiza un referéndum en el sector de salud, en el que la gran mayoría de los trabajadores mostraron su disconformidad con el arreglo resuelto por ATSA y AMPROS. La propuesta de consultar a las bases hizo que el sindicato de estatales se fortaleciera, pero no logró revertir la situación generada por el acuerdo, por lo que finalizó encausando sus reclamos por vía judicial. En este sentido el gobierno 'ganó' la pulseada al fomentar el pasaje de la protesta hacia una resolución jurídica del conflicto.

Es importante destacar que en el sector salud (motor del proceso de protestas), ATSA tiene mayor cantidad de afiliados no profesionales, y AMPROS tiene mayor número de afiliados profesionales que ATE (cuya base de sustentación es el sector de administración), por tanto los dos primeros gremios

²⁶ Ley 14786 de Conciliación Obligatoria del 22/12/58, cuyo Art.Nº 2 establece: "Suscitado un conflicto que no tenga solución entre las partes, cualquiera de éstas deberá, antes de recurrir a medidas de acción directa, comunicarlo a la autoridad administrativa, para formalizar los trámites de la instancia obligatoria de conciliación". El Ministerio podrá, asimismo, intervenir de oficio, si lo estimare oportuno, en atención a la naturaleza del conflicto.

sumados, lograron la totalidad de representación formalmente necesaria para firmar el acta y ratificar dicho acuerdo legalmente.

- Dilettantismo en la negociación: En general las acciones del gobierno desde 2005 hasta el cierre del conflicto (el acuerdo se produce con el recambio del partido gobernante en marzo de 2008) han apuntado a la dilución de las acciones conflictivas mediante la demora de plazos de negociación y respuestas confusas, como modo de ganar tiempo y favorecer la desmovilización, sembrando expectativas entre los trabajadores ante cada nueva reunión de las partes litigantes. Luego, cuando las respuestas se hacían imperantes, se esgrimía la falta de presupuesto o inmovilidad presupuestaria, para evitar cualquier arreglo.

b) Dirigidas a la opinión pública²⁷:

El uso de la opinión pública fue una de las herramientas más efectivas a la hora de cercar las manifestaciones y protestas de los empleados del Estado. Sin embargo, aún cuando esta práctica constituye un modo usual de interpelar un proceso de conflicto y de mellar sus apoyos, en este caso registró un recurso constante hacia los medios de comunicación a fin de establecer públicamente ciertas 'consideraciones' sobre el mismo o reforzar y/o atribuir algunas 'representaciones sociales' sobre los empleados del estado. A continuación señalaremos brevemente los temas centrales instalados en la agenda mediática durante el ciclo de protestas considerado:

- Redireccionar la responsabilidad de la crisis del Estado: en sus intervenciones mediáticas, el gobierno local acentuaba la responsabilidad de los agentes estatales por la saturación de demandas en los efectores públicos atribuyendo la misma a las acciones de protesta. La situación (realmente existente), remite empero a la crisis de los servicios públicos ya en ciernes en el ámbito local.
- Reforzar la representación social negativa del empleado público: las formas de reclutamiento históricas del sector público han estado asociadas a la inserción en dicho sector de los militantes políticos de los partidos que acceden al gobierno, por lo que, en general este grupo de trabajadores 'goza' de una representación social negativa, en términos generales. Esta atribución negativa fue esgrimida en forma recurrente para segregar y condicionar el apoyo social a las protestas de los empleados públicos.
- Deslegitimar y estigmatizar la dirección femenina del sindicato: en general en todo el proceso de conflicto la cara visible del sindicato en la persona de su Secretaria General fue puesta en cuestión atribuyéndole características que impugnan su género (atribuidas social y culturalmente a las mujeres).

²⁷ Estas apreciaciones son el resultado del análisis realizado en los periódicos locales sobre el tratamiento y circulación de información del ciclo de protestas de los estatales durante el período 2005-2007.

De modo tal que, ante cada interrupción de las negociaciones o manifestación pública del litigio, se acentuaba el carácter 'irracional', 'pasional' e 'irreflexivo' de la conducción sindical.

A modo de cierre:

Lejos de desaparecer de la escena pública, los trabajadores de la provincia de Mendoza han demostrado una gran capacidad de proyección y visibilización de sus demandas. Aún con un impasse de casi un quinquenio, su masiva participación y manifestaciones públicas lograron instalar el cuestionamiento general hacia las políticas del Estado en su faz neoliberal.

Los recambios generacionales y las transformaciones puestas en práctica en el modo de organización y gestión sindical, han traído aparejado un proceso de resignificación de la militancia sindical y de responsabilización entre los representantes y sus bases.

Sin embargo, estas expresiones, luego de un importante letargo en su accionar, han servido en mayor medida para medir los problemas actuales que debe enfrentar el sindicalismo de nuevo cuño frente a las condiciones y condicionamientos en los que se dirime la vida de los trabajadores en el escenario actual. Su transformación, antes que finalizada ha tenido su primer bautismo, en un ciclo de protestas que duró dos años (con momentos de latencia y de manifestación) y que no ha cerrado, dado los escasos resultados obtenidos de modo concreto y como cierre tangible del ciclo (aumento general del 20% para todos los empleados del plantel).

En definitiva, el lugar y la importancia que en el transcurso del bienio lograron los estatales puso de manifiesto un conjunto relevante de problemas postergados y aún pendientes para ese sector en especial y para el conjunto de trabajadores en general, a saber: cuál es la condición de los asalariados en Mendoza hoy, después del proceso de cercenamiento en sus derechos, el vaciamiento y crisis de los sindicatos tradicionales y la puesta en práctica de los formatos flexibles de disciplinar el trabajo.

Bibliografía

Almeyra, Guillermo (2004). *La protesta social en Argentina (1990-2004)*. Peña y Lillo, Bs. As.

Argumedo, A (2001). Los silencios y las voces de América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular. Ed. Del Pensamiento Nacional y Popular. Buenos Aires

Azpiazu, D. Y Nochteff, H (1995). *El Desarrollo Ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía Política*. Tesis Norma / FLACSO, Buenos Aires.

Azpiazu, D y Basualdo, E. (2000). *El circuito vitivinícola en Mendoza Argentina. Características y Perspectivas*, CEPAL, Santiago.

- Battistini, O (Coord.) (2003). *La atmósfera incandescente. Escritos políticos sobre la Argentina movilizada*. Trabajo y Sociedad, Bs. As.
- Battistini, O (2001). *Toyotismo y representación sindical. Dos culturas dentro de la misma contradicción*. Ponencia presentada al 5to. Congreso Nacional de Estudios del Trabajo ASET, Bs. As.
- Bialakowsky y Hermo (1997). *Notas sobre los silencios sociales en la trama de relaciones laborales*", en E. Villanueva (Comp.): "*Empleo y Globalización. La nueva cuestión social en Argentina*", UNQ, Bs. As.
- Collado, P. (2003): *Mendoza. Periferia de la periferia próspera*. En Revista Confluencia: Sociología, Año I, N° 1, Invierno de 2003, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, pág. 213-235
- Collado, P. (2005) *La incertidumbre de los trabajadores: Ciudadanía y Exclusión*, Tesis Doctoral, mimeo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
- Collado, P. (2005) Metamorfosis del trabajo o metamorfosis del capital. En Revista Herramienta N°, Buenos Aires, Argentina.
- DEIE (2001) Datos de la Encuesta permanente de Hogares, EPH, Mendoza
- Giarraca, N. (2001). *El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina*. En GIARRACA, N (Comp.): "*¿Una nueva ruralidad en América Latina?*", CLACSO, Bs. As.
- GORZ, André (1989): "*Adiós al proletariado (Más allá del socialismo)*", 3° Ed, Imago Mundi, Buenos Aires.
- Hinkelammert, F. (2002). *La inversión de los derechos humanos. El caso de John Locke*, en Hinkelammert, F.: "*El retorno del sujeto reprimido*", Publicaciones de la Universidad de Colombia, Colección Pensamiento de Liberación en América Latina, Bogotá.
- Hunt et al, (1993). Marcos de la acción colectiva y campos de la identidad en la construcción social de los movimientos. En Laraña, E. Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Academia, Madrid.
- Melucci, 1994 *¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?* En Laraña, E. Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Academia, Madrid.
- Pautassi, L.; Rossi, J.; Campos, L. (2003). *¿Derecho social o beneficio sin derechos. Plan Jefes y Jefas*. Ponencia presentada al 6to. Congreso de Estudios del Trabajo - ASET, Buenos Aires.
- Rofman, A. (2000). *Desarrollo regional y exclusión social. Transformaciones y crisis en la Argentina Contemporánea*. Amorrortu, Buenos Aires.
- Scribano, A. (2001) Comp. Geometría del Conflicto: estudios sobre acción colectiva y conflicto social, Universitas, Córdoba, Argentina.
- Svampa, M. (2002). *Las dimensiones de las nuevas protestas sociales*. En Revista el Rodaballo, Año VIII, N° 14, Invierno, Bs. As.

Svampa, M. y Pereyra, S, (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros*. Biblos, Bs. As.

Zibechi, R (2003). *Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento*. Letra Libre, Bs. As.